

---

DE EMPRESA ESTADOUNIDENSE A EMPRESA PÚBLICA:  
LOS TRABAJADORES Y LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE EN CHILE



*Ángela Vergara Marshall*

## **Introducción**

En América Latina, la historiografía sobre la empresa pública se ha concentrado fundamentalmente en analizar sus aspectos económicos, políticos e institucionales. Ya sea como símbolo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones o, más recientemente, como víctima del ataque neoliberal, la empresa pública ha sido estudiada como resultado de grandes proyectos políticos. En otras palabras, ésta ha sido analizada “desde arriba”, desde la perspectiva de las cúpulas políticas y el Estado. Irónicamente, los grandes ausentes de estas interpretaciones han sido los propios trabajadores. ¿Qué papel jugaron los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales en el origen y desarrollo de la empresa pública a lo largo del continente? ¿De qué forma y hasta qué punto las empresas públicas lograron responder e incorporar exitosamente las demandas de los trabajadores? ¿En qué medida las empresas públicas intentaron transformar la posición de los trabajadores en la propia empresa y en el proceso productivo? ¿Es posible hablar de un nuevo tipo de relaciones o pactos laborales en el contexto de la expansión de la empresa pública en América Latina? ¿Dio la empresa pública origen a nuevos sistemas contractuales, categorías de trabajadores y cultura laboral?

Estas preguntas adquieren especial relevancia si consideramos que la empresa pública se expandió como parte de las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas que dominaron América Latina durante el periodo 1930-1970. Asimismo, en muchos casos se plantearon como alternativa a la empresa privada, tanto en el área productiva como de servicios, en un esfuerzo de representar el interés público de toda la nación (Guajardo, 2013). Muchas de ellas llegaron de la mano de gobiernos y proyectos políticos de corte populista, reformistas e incluso revolucionarios, que plantearon, en mayor o en menor medida la

incorporación de los trabajadores en el Estado o establecieron alianzas con aquellos grupos más organizados. Los trabajadores, tal como lo ha demostrado la llamada nueva historia del trabajo, no tuvieron un rol pasivo en estos regímenes políticos populistas y reformistas, sino más bien establecieron una compleja relación con el Estado y los partidos políticos, desarrollando diversas estrategias de adaptación, alianza y negociación (French, 1992 y 2004, James, 1994, Pavilack, 2011). De este modo, resulta fundamental explorar la relación entre trabajadores y Estado en el origen y desarrollo de la empresa pública y examinar éstas no sólo como parte de un modelo de desarrollo económico sino también en relación con las demandas de mejoramiento económico y social de sus trabajadores. En otras palabras, cabe preguntarse cómo los trabajadores concibieron, pensaron, negociaron y transformaron las empresas públicas en América Latina.

Este artículo examina estas temáticas a través de la historia de la Gran Minería del Cobre (GMC) en Chile durante la segunda mitad del siglo XX. Durante este periodo, la GMC, controlada hasta 1971 por capital norteamericano, se consolidó como el sector exportador más importante del país, llegando a ser considerada “la viga maestra” de la economía nacional. Hacia comienzos de la década de 1960, la GMC empleaba más de 17 mil trabajadores y empleados, quienes constituyeron uno de los grupos sindicales con mayor influencia política y económica dentro del país, aunque no libre de tensiones y controversias (Barría, 1970). Dada su importancia económica, el cobre fue materia ineludible en todos los debates sobre industrialización, dependencia y desarrollo económico de la época y elemento fundamental del nacionalismo económico (Girvan, 1972). Luego de un largo y conflictivo proceso, el Congreso Nacional aprobó unánimemente la nacionalización del cobre el día 11 de julio de 1971, meses más tarde el Presidente Salvador Allende decretó que las empresas nacionalizadas no tendrían derecho a indemnización debido a las deducciones por concepto de rentabilidad excesiva. A partir de esta fecha, se dio inicio a un nuevo capítulo en la historia del cobre y sus trabajadores: el cobre como empresa pública nacionalizada. Entre 1971 y 1973, esta nueva empresa pública incorporó y se desarrolló dentro de las grandes transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que caracterizaron el proyecto revolucionario de la Unidad Popular. A partir del golpe militar de septiembre de 1973 y la reestructuración de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) en 1976, el cobre se consolidó como una de las empresas públicas más importantes del

país, reemplazando las demandas laborales por las ideas de eficiencia y productividad que caracterizaron el nuevo modelo económico impuesto por la dictadura militar.<sup>1</sup>

## **El cobre como empresa norteamericana (1920-1971)**

Ha existido una gran diversidad de empresas públicas en América Latina, desde instituciones financieras y empresas de servicios (eléctricas, agua potable, comunicaciones, aerolíneas, etc.) a plantas industriales y yacimientos mineros. Su tamaño, mercados, e importancia económica también son variados. Asimismo, mientras algunas surgieron como empresas públicas otras tuvieron una trayectoria más larga y compleja que incluyó procesos de expropiación y nacionalización. En otras palabras, tal como lo señalan los distintos capítulos de este libro, es fundamental entender cómo se constituyeron las distintas empresas públicas. En el caso de la GMC, estamos frente a una empresa pública nacionalizada que ha cumplido un rol central en la economía nacional. Estas características influyeron enormemente en el conflictivo proceso de nacionalización, el estatus de los trabajadores y la futura reestructuración de la empresa, siendo indispensable examinar la historia de este proceso para comprender sus características actuales.

En la década de 1920, dos grandes empresas estadounidenses, Anaconda Copper Company y Kennecott Copper Corporation, transformaron radicalmente la minería del cobre en Chile, dando inicio a un nuevo ciclo cuprífero que se caracterizó por la explotación a gran escala de depósitos de baja ley. En el norte del país, Anaconda adquirió el mineral de Potrerillos y Chuquicamata, consolidándose como una empresa multinacional y verticalmente integrada (Marcosson, 1976). En El Teniente, mineral ubicado en la provincia de Colchagua a más de 2 300 metros de altura, la Kennecott Corporation construyó la mina subterránea más grande del mundo. Ambas empresas invirtieron grandes sumas de capital, introdujeron alta tecnología y modernizaron

<sup>1</sup> En 1955, la Ley del Nuevo Trato creó el Departamento del Cobre que tenía como objetivo “vigilar” la gestión e inversión de las empresas extranjeras. En 1967, se creó la Corporación del Cobre, la cual primero administró las llamadas sociedades mixtas que se crearon con la chilénización (1966) y la nacionalización pactada (1969) y, a partir de 1971, los yacimientos nacionalizados. En 1976 fue reemplazada por la Corporación Nacional del Cobre.

las relaciones sociales y de trabajo.<sup>2</sup> A comienzos de la segunda guerra mundial, éstas producían un promedio de 488 mil toneladas de cobre, llegando rápidamente a convertirse en el producto de exportación más importante del país (Reynolds, 1965). Junto con generar divisas, el cobre era una fuente significativa de ingresos para el Estado chileno, transformándose en el comúnmente llamado “sueldo de Chile.” Esta importancia económica no pasó inadvertida para los propios trabajadores, quienes se proyectaron al país como los productores de la riqueza nacional. Tal como lo señala Belmont Cortés (2011: 23-24) en el caso de los trabajadores de las compañías de electricidad quienes veían su trabajo al “servicio del bienestar colectivo”, los trabajadores del cobre estaban conscientes de su influyente posición en la economía nacional.

La creciente importancia del cobre para el país, la presencia hegemónica del capital estadounidense y los límites de un modelo industrializador y desarrollista levantaron una serie de desafíos para la política económica. Para muchos, la dependencia de Chile del mercado exterior y el capital extranjero eran las causas fundamentales de la inestabilidad económica nacional, y el cobre y sus divisas las respuestas a los crecientes desafíos económicos que enfrentaba el país. De esta forma, entre 1932 y 1971, la clase política buscó distintos mecanismos para controlar la inversión extranjera, garantizar que aumentaran las inversiones en Chile, conectar la minería del cobre al resto de la economía nacional y ejercer cierto control sobre el mercado internacional (Girvan, 1972; Vera, 1961). En un largo proceso de aciertos y errores que caracterizaron la política del cobre durante la Guerra Fría, creció la sensación que Chile y la economía nacional perdían una supuesta prosperidad; por lo tanto, si el cobre fuese “chileno”, el país podría resolver muchas sino todas sus grandes contradicciones (Fernandois *et al.*, 2009). En el contexto global de la Guerra Fría, recuperar el control sobre el cobre era parte de una lucha más amplia contra las políticas de corte imperialista de Estados Unidos y un esfuerzo por reafirmar la soberanía nacional.

En el nivel local, las empresas estadounidenses establecieron condiciones de vida y trabajo muy particulares, que las distinguieron

<sup>2</sup> Para administrar sus operaciones en Chile, ambas empresas crearon compañías subsidiarias o filiales. Anaconda mantuvo las siguientes compañías en Chile: Andes Copper Company (Potrerillos), Potrerillos Railway Company (ferrocarril), Chile Exploration Company (Chuquicamata) y Santiago Mining Company (pequeño mineral ubicado en Lo Aguirre, provincia de Santiago). Kennecott operó el mineral de El Teniente a través de la Braden Copper Company.

rápido de otros sectores productivos que existían en el país (Finn, 1998; Klubock, 1998; Vergara, 2008). En la década de 1920, el aislamiento geográfico, la necesidad de establecer un sistema de trabajo de tipo industrial (turnos, tecnología, disciplina, etc.) y las ideologías y prácticas patronales existentes influyeron en la construcción de elaborados campamentos mineros (también conocidos como *company towns*) y sistemas de bienestar social. Cuidadosamente diseñados, los campamentos contaban con habitaciones para obreros, empleados y supervisores, escuelas, hospitales, almacenes, teatros y una serie de otras instituciones sociales. Para muchos contemporáneos, los campamentos del cobre eran atractivos ejemplos de la modernidad y eficiencia que traía consigo el llamado capitalismo bienestar, símbolos de un sistema industrial extranjero que buscaba la transformación no sólo tecnológica y productiva sino también del capital humano y social (Dinius y Vergara, 2011; Vergara, 2013). Sin embargo, a pesar de sus beneficios materiales, los campamentos se construyeron sobre la base de principios jerárquicos y desiguales, estableciendo un estricto control y segregación de los espacios de vida, recreación y trabajo.

Asimismo, aunque los salarios eran relativamente mejores que en el resto del país y las condiciones de trabajo y de vida fueron mejorando sustancialmente, a lo largo del siglo XX existían importantes deficiencias. Hacia fines de la década de 1960, el trabajo minero continuaba siendo peligroso, difícil y extenuante. Había numerosos problemas de seguridad e higiene industrial, las enfermedades respiratorias hacían estragos entre los trabajadores de mina y plantas de molienda y los accidentes eran frecuentes sobre todo en el mineral El Teniente. Los abusos de autoridad de capataces y supervisores eran constantes, reforzados por las diferencias lingüísticas, étnicas y de nacionalidad que existían entre el personal extranjero y los trabajadores chilenos (Klubock, 2001). Las condiciones de aislamiento geográfico limitaban enormemente las posibilidades de acceso a bienes de consumo, recreación, educación y empleo. Estos problemas aparecían con especial fuerza en las negociaciones colectivas anuales, cuando los sindicatos buscaban mejorar las condiciones de trabajo y de vida a través de aumentos salariales, bonos y beneficios para los trabajadores y sus familias (Vergara, 2008). En este contexto, el estatus de los trabajadores del cobre dentro de la industria estadounidense se caracterizó por el acceso a beneficios sociales otorgados directamente por la empresa (habitación, educación, salud, etc.), salarios relativamente altos que buscaban compensar los riesgos del

trabajo y la existencia de una serie de bonos que complementaban los ingresos de los trabajadores. Para los trabajadores del cobre, tal como se analiza en la siguiente sección, estos llamados beneficios eran conquistas y derechos adquiridos, los cuales, eventualmente, debían ser respetados por una eventual empresa pública nacionalizada (Zapata, 1975).

## **Un nacionalismo desde abajo y lo local**

Si la nacionalización del cobre en 1971 fue claramente el fruto de un largo proceso político y económico que involucró a diversos actores del país, fue también resultado de la convergencia de ideas, proyectos y trayectorias diversas que no siempre respondían a una misma matriz ideológica y experiencial. Pero, si la historiografía chilena ha estudiado detenidamente la evolución de la política económica con respecto al cobre, pocos sabemos el rol que cumplieron los trabajadores en este proceso. ¿Qué entendían los trabajadores del cobre por nacionalismo económico y, eventualmente, una empresa pública nacionalizada? ¿Cómo se articularon sus aspiraciones económicas concretas (mejoramiento salarial) y la lucha por la nacionalización del cobre? ¿De qué forma este nacionalismo conllevaba también una transformación de la empresa y de las relaciones de poder al interior de ella? En las últimas décadas, la historiografía latinoamericana ha prestado creciente interés a examinar cómo las mujeres y las distintas clases sociales y grupos étnicos han visto o concebido el Estado; cómo desde abajo, desde muchas veces en condiciones de marginalidad, han surgido visiones distintas de lo que es la nación y el nacionalismo (Mallon, 1995). A partir de esta propuesta, planteamos la importancia de explorar y analizar cómo los mineros del cobre entendieron su relación con el capital extranjero y el Estado, y cómo, a partir de estas relaciones locales y cotidianas que se dieron en los espacios de trabajo y de vida, articularon un discurso más amplio de lo que era la economía nacional, las relaciones socioeconómicas y la nación.

Como punto inicial señalamos que este nacionalismo, que llamaremos local y desde abajo, tuvo su origen en las condiciones de vida y trabajo previamente descritas. Estas experiencias locales se fueron articulando en un discurso más amplio a medida que fueron incorporando la larga trayectoria histórica del movimiento sindical chileno, el pensamiento antiimperialista de la izquierda y las experiencias que se daban en otras

partes de América Latina. Tal como lo plantea Charles Bergquist (1986) en su estudio sobre los trabajadores en el sector exportador en diversas partes de América Latina, se observa en los conflictos laborales y discursos de los actores locales del cobre una confrontación con una empresa que no sólo representaba al capital sino a lo extranjero y ajeno (Klubock, 2001, Latcham, 1926). A partir de finales de la segunda guerra mundial, el movimiento sindical del cobre se consolidó como un importante actor político y laboral, los conflictos locales fueron adquiriendo una creciente resonancia en el nivel nacional, produciéndose un evidente proceso de radicalización de sus demandas y de incorporación del “antiimperialismo/nacionalismo” como uno de sus ejes centrales (Barría, 1970). En un contexto nacional en el cual se debatía continuamente la relación de Chile, el cobre y el capital norteamericano, los sindicatos del cobre proponían el control del Estado de las riquezas básicas (empresa pública nacionalizada) como así también el mejoramiento de las condiciones de vida y la transformación de las relaciones de trabajo al interior de la empresa (Swanger, 1997; Vergara, 2008).

Estas dos demandas se observan con bastante claridad en las declaraciones del pensamiento y acción de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Cobre (CTC). Fundada en 1951 en la ciudad de Machalí, en las inmediaciones del Mineral de El Teniente, la CTC reunió a todos los sindicatos industriales y de empleados de los tres yacimientos que conformaban la Gran Minería del Cobre (Vergara, 2008). En su documento fundacional, los líderes se comprometieron a crear y fortalecer vínculos de solidaridad entre los diferentes yacimientos, defender el interés del país, aumentar la participación del Estado y luchar por la eventual nacionalización del cobre (Tapia, 2000). Al pedir la nacionalización de las llamadas riquezas básicas, los líderes de la CTC confluían con el discurso de líderes políticos de izquierda (Lafferte y Ocampo, 1951), que desde diversas plataformas comenzaron a cuestionar la legitimidad de la empresa norteamericana en Chile.<sup>3</sup>

Para la CTC, la nacionalización del cobre y la eventual participación del Estado estaban complejamente entramadas con las demandas por mejoramiento económico y de las condiciones de trabajo. Asimismo,

<sup>3</sup> En 1951, los diputados comunistas Elías Lafferte y Salvador Ocampo presentaron el primer proyecto de nacionalización; ese mismo año se publicó “Debe nacionalizarse el cobre” en la *Revista de los Empleados de Chile*, 27 de julio de 1951. En 1952, Salvador Allende presentaría el primero de sus proyectos de nacionalización.

como representantes legítimos de los trabajadores del sector, la CTC demandó participar en las negociaciones con el capital extranjero, cuestionando las formas tradicionales de hacer y pensar la política económica en el país. Dentro de este proceso, se fue delineando una postura que buscaba incorporar a los sindicatos en la empresa, su gestión y proceso de decisiones, pensando una empresa pública nacionalizada que serviría al país, pero entendiendo por país a los trabajadores y no a los intereses macroeconómicos de un abstracto e inalcanzable desarrollo. Este choque entre las demandas y aspiraciones de la CTC y el Estado, se observa con especial claridad en las huelgas generales que siguieron la aprobación de emblemáticos acuerdos entre el Estado Chileno y las empresas norteamericanas: La Ley del Nuevo Trato (1955) y la llamada chilenización del cobre (1965) (Vergara, 2008). En un informe presentado en el congreso nacional de la CTC en 1967, la CTC no sólo criticó la débil postura del gobierno en los acuerdos de 1965 sino reafirmó su rol como “los únicos [junto al resto de los trabajadores ‘explotados’ de Chile] y los auténticos defensores de nuestra independencia, de nuestra soberanía y de nuestra dignidad de seres humanos” (*Cobre*, mayo, 1967: 4).

Dada la trayectoria del movimiento sindical, la consolidación de un cierto estatus, dentro de la lucha por la nacionalización se dio un fuerte esfuerzo por resguardar los llamados derechos adquiridos, es decir que la nacionalización no implicara la pérdida de beneficios sociales, económicos. Es así que en 1969, por ejemplo, en el marco de la llamada nacionalización pactada de las empresas de Anaconda y la creación de una empresa mixta, Anaconda-Corporación del Cobre, la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre planteó claramente que “los derechos, obligaciones y sistemas de remuneraciones actualmente vigentes, que derivan de las Actas de Avenimiento, Contratos Colectivos, Fallos Arbitrales, usos y costumbres o que provengan de disposiciones legales o estipulaciones contractuales, en favor de dichos trabajadores, continuarán en vigencia, siendo su cumplimiento de cargo de la Corporación del Cobre, como continuadora legal de las empresas expropiadas” (*Cobre*, junio, 1969: 7). Es decir, los cambios en el estatus de la empresa, en este caso la creación de una empresa mixta con participación del Estado, debía al menos garantizar todos los derechos y conquistas de los trabajadores y respetar el estatus de trabajador del cobre.

En este sentido, cuando las ideas políticas se entremezclaban con las necesidades económicas y materiales concretas, el nacionalismo se volvía complejo, desigual y muchas veces contradictorio, dependiendo de las

miradas, intereses, coyunturas políticas y, muchas veces, las experiencias individuales dentro de la empresa. Los historiadores del mundo del trabajo han analizado la figura del llamado “trabajador apatronado”, quien por diversas razones (beneficios, miedos, aspiraciones) mantiene una relación de lealtad al patrón, la cual no se explica sólo por la cooptación sino por el establecimiento de un vínculo e identificación, aunque ficticia, con los intereses del patrón (Winn, 1986). En las empresas extranjeras se daba una cierta cuota de admiración y emulación a lo extranjero y foráneo, muchas veces visto como cultural y racialmente superior o símbolo de estatus (Tinker-Salas, 2009). De esta forma, observamos que si bien el nacionalismo se articuló como demanda central del movimiento sindical del cobre, esto no implicó que todos los trabajadores la apoyaran en el nivel individual o en su vida cotidiana. Estas ambigüedades abundaban sobre todo en contextos de inseguridad económica y entre aquellos sectores que temían que su estatus socioeconómico (empleados, profesionales y supervisores) fuese amenazado por cambios radicales. Fue a partir de estas experiencias políticas, sindicales y locales que los trabajadores del cobre participaron en el proceso de nacionalización que comenzó con la elección de Salvador Allende en 1970.

### **Nacionalización y participación durante la Unidad Popular (UP), 1970-1973**

En julio de 1971, durante el acto de firma del Decreto 92, el cual estableció que las empresas extranjeras no tendrían derecho a indemnización debido a las llamadas rentabilidades excesivas, el presidente Salvador Allende (1972: 183) declaró claramente:

En la preservación de su patrimonio, en defensa de los intereses inherentes a su soberanía económica —históricamente vulnerados por las empresas cupríferas—, el pueblo de Chile ha acumulado derechos frente a éstas, que hoy ejerce, legítima y racionalmente, al deducir rentabilidades excesivas que obtuvieron las empresas nacionalizadas.

A través de la nacionalización, aprobada por el Congreso Nacional en julio de 1971, y el Decreto 92, Chile se acercaba a su aspirada independencia y “soberanía” económica. La nacionalización del cobre representó uno de los hitos más importantes del gobierno de la Unidad Popular, la esperanza de poder utilizar los recursos del cobre para

sostener las grandes transformaciones económicas y sociales que el país requería.<sup>4</sup> Para Salvador Allende la recuperación de las llamadas riquezas básicas simbolizaba la independencia económica y las posibilidades de desarrollo económico. Sólo a través de la recuperación de estas riquezas básicas, señaló Allende (Allende, 1972: 237) en un discurso ante los trabajadores del mineral de Chuquicamata en octubre de ese mismo año, Chile “podría romper su dependencia económica y ser un país independiente”. La propaganda del gobierno de la UP reforzaba esta imagen, sugiriendo que la nacionalización del cobre permitiría a Chile “ponerse pantalones largos”, y así también satisfacer las necesidades económicas y sociales de todos los chilenos.

En el contexto de la vía chilena al socialismo, la nacionalización significaba crear una nueva empresa pública y transformar el rol y estatus de los propios trabajadores al interior de la empresa. En un proceso que no sólo se limitó a la recientemente nacionalizada minería del cobre, sino a todas aquellas empresas que pasaron a ser parte del Área de Propiedad Social (APS) de la economía, el gobierno, las organizaciones sindicales y los propios trabajadores cuestionaron las estructuras jerárquicas al interior de la empresa. Este cuestionamiento, tal como lo señala Cury (2013) era fruto de una larga experiencia histórica de explotación y marginación de los trabajadores chilenos dentro de la empresa. El convenio entre la Central Única de Trabajadores y el Gobierno de la Unidad Popular, firmado el 7 de diciembre de 1970, respondía a esa demanda histórica, acordando la participación de los trabajadores en la “dirección de las empresas de las áreas social y mixta”. Esta participación se concretaría a través de la incorporación de los trabajadores en el consejo de administración de la empresa y en la creación de asambleas de trabajadores y comités de producción (CUT, 1971). Dentro del programa a largo plazo de la UP, la participación, tal como lo señala Samaniego (1995: 32), se constituiría en “el fundamento del cambio social” y el cuestionamiento de las relaciones de corte capitalista. El mismo Allende (1972: 250-251)

<sup>4</sup> En un primer periodo (julio de 1971 a julio de 1972), los distintos yacimientos estuvieron a cargo de comisiones administradoras bajo la dirección de la Corporación del Cobre. En julio de 1972, un decreto del Ministerio de Minería creó cinco empresas nuevas nacionalizadas (sociedades colectivas del Estado): Compañía de Cobre Chuquicamata (Cobrechuqui), Compañía Minera Exótica, Compañía de Cobre Salvador (Cobresal), Compañía Minera Andina y La Sociedad Minera El Teniente. La Corporación del Cobre pasaba a tener 95% del capital y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) un 5%. (Novoa, 1972).

prometió a los trabajadores de Chuquicamata, en octubre de 1971, que el cobre “dejará de tener las características de una empresa capitalista y los compañeros dejarán de ser los patrones nombrados por nosotros; ustedes van a dirigir la empresa”.

De esta forma, esta nueva empresa pública nacionalizada conlleva dos grandes procesos, a veces difíciles de compatibilizar. Por un lado, la toma de posesión de una empresa que hasta ese entonces estaba en manos del capital extranjero, con la esperanza de que al tener control de la empresa se podrían financiar las demandas del país. En otras palabras, el desafío de crear una empresa pública que sirviera los intereses más amplios de la nación y contribuyera a lo que el gobierno denominó la “batalla de la producción”. Esto, tal como lo señaló Allende en sus numerosos discursos, implicaba que los trabajadores del cobre deberían hacer sacrificios, sobre todo posponer sus demandas de mejoramiento económico en bien del país. Por otra parte, la nacionalización significó comenzar a implementar un complejo proceso de participación de los trabajadores. De esta forma, tomando en cuenta el estatus tradicional de los trabajadores del cobre en la empresa prenacionalizada, las diferentes expectativas del gobierno, los distintos sectores políticos y de los trabajadores frente a la nacionalización, las necesidades y crecientes dificultades económicas del país y los enormes desafíos de reorganizar la industria del cobre como empresa pública nacionalizada que garantizase la participación de los trabajadores, el cobre se convirtió rápidamente en uno de los sectores más complejos durante los años de la UP (Bitar y Pizarro, 1986).

### **Una empresa pública autoritaria y neoliberal: reflexiones finales**

El Golpe Militar de septiembre de 1973 aunque no cuestionó el estatus de la minería del cobre como empresa pública nacionalizada, cumpliendo ésta un papel fundamental en el nuevo modelo económico, si introdujo cambios drásticos y dramáticos en el estatus de los trabajadores del cobre. Al igual que en el resto del país, las organizaciones sindicales fueron intervenidas, los dirigentes detenidos y relegados y la negociación colectiva suspendida (Drake, 1996). A partir de 1978, se dio inicio a una reestructuración del movimiento sindical, tanto en el cobre como en el resto del país. Por un lado, los efectos de la crisis económica

motivaron protestas en los campamentos, cuchareos, ayunos y marchas que buscaban, una vez más, mantener lo que se consideraban los estándares de vida y de trabajo del cobre (Mac-Clure y Valenzuela, 1985). Por otro lado, los trabajadores respondían y protestaban contra los nuevos cambios políticos e institucionales, fundamentalmente los anuncios de un nuevo código del trabajo y una futura constitución política para el país. Desde la empresa pública más importante y poderosa del país, se levantó un movimiento sindical que buscó mantener y mejorar las condiciones de vida y luchar por la restauración de la democracia como única garantía legítima para mantener ese estatus. En un famoso discurso de 1982, en el cual la CTC aprobó la convocatoria a Paro Nacional, un joven dirigente del cobre, Rodolfo Seguel, resumió el malestar de los trabajadores y su compromiso:

Ha llegado el momento de ponerse de pie y decir BASTA. Los trabajadores del cobre, tenemos la autoridad moral para llamar a un PARO NACIONAL de 24 horas, destinado a protestar contra la legislación laboral y la política económica y social imperante. Sólo una huelga general de todos los chilenos puede hacer que los trabajadores recuperemos nuestra dignidad perdida y que podamos participar en forma decidida y responsable en la forja del destino de nuestro país. (Mac-Clure y Valenzuela, 1985: 69)

Durante la década de 1980, entonces, los trabajadores del cobre asumieron un nuevo protagonismo político. Su estatus de trabajador del cobre dentro de una empresa pública nacionalizada se veía amenazado por la dictadura militar y su agenda de cambios políticos, económicos y laborales, lo local volvía nuevamente a entramarse con demandas nacionales más amplias. La matriz histórica del sindicalismo del cobre que había influido el proceso de nacionalización continuaba vigente. Hasta 1971, los trabajadores del cobre concibieron un proceso de nacionalización que beneficiara al país, garantizase su estatus económico y democratizase las relaciones de producción al interior de la empresa. Entre 1971 y 1973, estas demandas se radicalizaron en el contexto de grandes cambios políticos que caracterizó la Unidad Popular y el esfuerzo de crear una empresa pública no capitalista. A partir del golpe militar, el sindicalismo del cobre busca reconstituirse como actor social y político que busca defender, por un lado, a esta empresa pública nacionalizada de los ataques neoliberales y privatizadores y, por otro, las condiciones

de vida y de trabajo que están siendo constantemente amenazadas por los esfuerzos de transformar Codelco en una empresa más eficiente y productiva.

## Referencias

- Allende, S. 1972. *Su pensamiento político*. Santiago: Quimantú.
- Barría, J. 1970. *Los sindicatos de la Gran Minería del Cobre*. Santiago: INSORA.
- Belmont Cortés, E. 2011. *Las batallas alrededor del servicio público de energía eléctrica: convergencias y divergencias entre Electricidad de Francia y Luz y Fuerza del Centro*. México: Universidad Autónoma de Querétaro y Miguel Ángel Porrúa.
- Bergquist, C. 1986. *Labor in Latin America: Comparative essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia*. Stanford CA: Stanford University Press.
- Bitar, S. y C. Pizarro. 1986. *La caída de Allende y la huelga de El Teniente*. Santiago: Ediciones del Ornitórrinco.
- Cury, M. 2013. *O protagonismo popular: Experiências de classe e movimentos sociais na construção do socialismo chileno (1964-1973)*. Tesis de doctorado en historia, Instituto de Filosofía e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- CUT (Central Única de Trabajadores). 1971. *Normas básicas de participación de los trabajadores en la dirección de la empresa de las áreas social y mixtas*. Santiago: ODEPLAN.
- Dinius, O. y Á. Vergara (coords). 2011. *Company Towns in the Americas: Industrial Capitalism, Spatial Engineering, and Working-Class Communities*. Athens, GA: Georgia University Press.
- Drake, P. 1996. *Labor movements and dictatorships: The Southern Cone in comparative perspective*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
- Fernandois, J. et al. 2009. *Historia política del cobre, 1945-2008*. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario.
- Finn, J. 1998. *Tracing the veins: of copper, culture, and community from Butte to Chuquicamata*. Berkeley, CA: University of California Press.
- French, J. 1992. *The brazilian workers' ABC: Class conflict and alliances in modern São Paulo*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

- \_\_\_\_\_. 2004. *Drowning in laws: Labor law and brazilian political culture*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Girvan, N. 1972. *Copper in Chile: A study in conflict between corporate and national economy*. Kingston: Institute of Social and Economic Research, University of West Indies.
- Guajardo, G. 2013. “Empresas públicas en América Latina: historia, conceptos, casos y perspectivas”. *Revista de Gestión Pública*, núm. 1.
- James, D. 1994. *Resistance and integration: Peronism and the Argentine working class, 1946-1976*. Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Klubock, T. 1998. *Contested communities: Class, gender, and politics in El Teniente's Copper Mine, 1904-1951*. Durham: Duke University Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. “Nationalism, race, and the politics of imperialism: Workers and North American capital in the chilean copper industry”. En Joseph, G. (ed.), *Reclaiming the Political in Latin American history: Essays from the North*. Durham: Duke University Press.
- Latcham, R. 1926. *Chuquicamata. Estado Yankee*. Santiago: Editorial Nascimento.
- Lafferte, E. y S. Ocampo. 1951. *El cobre de Chile: Nacionalización de Chuquicamata, Potrerillos y Sewell*. Santiago: n/ed.
- Mac-Clure, O. e I. Valenzuela. 1985. *Conflictos de la Gran Minería del Cobre 1973-1983*. Santiago: CEDAL.
- Mallon, F. 1995. *Peasant and nation: The making of postcolonial Mexico and Peru*. Berkeley y Los Angeles, CA: University of California Press.
- Marcosson, I. 1976. *Anaconda*. Nueva York, NY: Dodd, Mead, and Company.
- Novoa, E. 1972. *La batalla por el cobre. Comentarios y documentos*. Santiago: Quimantú.
- Pavilack, J. 2011. *Mining for the nation: The politics of Chile's coal communities from the popular front to the cold war*. College Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Reynolds, C. 1965. “Development problems of an export economy: The case of Chile and copper”. En Mamalakis, M. y C. Reynolds, *Essays on the chilean economy*. Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.
- Samaniego, A. 1995. “Los límites de la estrategia de la Unidad Popular y el ‘Área de Propiedad Social’”. *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, núm. 109.
- Swanger, J. 1997. “Defending the nation's interest: Chilean miners and the copper nationalization”. En Brown, J. (ed.), *Workers' control in*

- Latin America, 1930-1979*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Tapia, L. 2000. "Semblanzas de la Federación de Trabajadores del Cobre". *Cobre Chileno*, núm. 55.
- Tinker-Salas, M. 2009. *The enduring legacy: Oil, culture, and society in Venezuela*. Durham: Duke University Press.
- Vera, M. 1961. *La política económica del cobre en Chile*. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile.
- Vergara, Á. 2008. *Copper workers, international business and domestic Politics in Cold-War Chile*. College Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- \_\_\_\_\_. 2013. "Paternalismo industrial, empresa extranjera y campamentos mineros en América Latina: un esfuerzo de historia laboral y transnacional." *Avances del Cesor*, núm. 10.
- Winn, P. 1986. *Weavers of the Revolution: The Yarur workers and Chile's road to socialism*. Nueva York, NY: Oxford University Press.
- Zapata, F. 1975. *Los mineros de Chuquicamata: ¿Productores o proletarios?* México: Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.